



Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León
Ilmo. Sr. Director General de Relaciones con la Sociedad Civil
C/ Santiago Alba, 1
47008 VALLADOLID

Expediente: 1765/2022

Asunto: Presencia incontrolada de reses de ganado ovino en la localidad de XXX (Zamora) / Resolución

Centros directivos: Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural / Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio

Ilmo. Sr.:

De nuevo nos dirigimos a V.I. una vez recibido el informe solicitado en relación con el expediente que se tramita en esta Institución con el número arriba indicado, referencia a la que rogamos haga mención en ulteriores contactos que llegue a tener con nosotros.

Como recordará, el motivo de queja hacía alusión a los daños causados por la presencia incontroladas de ovejas en las fincas rústicas de la localidad de XXX (Zamora).

Admitida la queja a trámite e iniciada la investigación oportuna sobre la cuestión planteada, nos dirigimos a las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, así como a la Subdelegación del Gobierno en Zamora solicitando los informes correspondientes a la problemática que constituye el objeto de la presente queja. Del análisis de la información facilitada por el autor de la queja y por las Administraciones implicadas que obra en estas dependencias, **se desprenden los siguientes hechos.**

La cuestión objeto de queja hace referencia a la inactividad administrativa ante la presencia incontrolada del ganado ovino, propiedad de D. XXX, en fincas, pastos y cercados particulares de la localidad de XXX, perteneciente al municipio de XXX (Zamora), ya que estas ovejas deberían estar pastando en el interior del Monte de Utilidad Pública nº XXX, denominado “XXX”, sin que desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora se hubieran dado instrucciones para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas para el aprovechamiento de pastos concedido.

Además, según afirma el reclamante, se ha constatado la presencia de reses muertas en el campo, tal como se ha denunciado por D. XXX y varios vecinos más tanto a la Subdelegación del Gobierno en Zamora el 29 de enero de 2022, como ante el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora (Reg.



entrada Ayuntamiento de XXX), sin que se haya adoptado medida alguna para evitar los problemas de sanidad animal denunciados.

En consecuencia, se acordó por esta Procuraduría solicitar información a los organismos competentes en los asuntos expuestos en la presente queja. Así, en primer lugar, se recibió el informe remitido por la Subdelegación del Gobierno en el que se admitía que, como consecuencia de la recepción de la citada denuncia, se había solicitado información a la Guardia Civil y al Ayuntamiento de XXX para determinar la veracidad de lo expuesto. En las comunicaciones remitidas, se reconocía por dichos organismos la conflictividad generada por el ganadero, citando a título de ejemplo que, con motivo de la presencia en diciembre de 2021 de reses en propiedades ajenas, agentes del Puesto de XXX tuvieron que formular la oportuna denuncia por no permanecer al cuidado y vigilancia de las mismas. Además, desde la Administración municipal, se resaltaban las labores de mediación que se habían realizado para intentar evitar los problemas con este ganadero que carecía de experiencia en el sector, habiéndole facilitado material para que pueda colocar una malla ganadera, ya que en ocasiones sus ovejas pacían incontroladas en parcelas particulares sin autorización de sus propietarios, dañando también los cercados que las delimitan.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural nos comunicó que, con anterioridad a los hechos denunciados, se habían formulado el 5 de marzo de 2022 dos denuncias por parte de la Patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil de Zamora:

1.- Denuncia nº XXX, y que motivó la realización el 16 de marzo de 2022 de una inspección conjunta posterior a esa explotación ganadera por parte de estos agentes y personal del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora, en la que se constataron las siguientes deficiencias:

- Se comprueba la tenencia de ganado ovino en nave sin registro,
- Libro registro incorrectamente cumplimentado
- Presencia de cadáveres de corderos que tienen la consideración de SANDACH (Subproductos de origen Animal No Destinados al Consumo Humano)

Como consecuencia de dichas actuaciones, se tramitó un expediente sancionador contra el Sr. XXX por la comisión de una serie de infracciones en materia de sanidad animal (**Expte.: XXX**), y que dio lugar a la imposición de la sanción pertinente por Resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de fecha XXX, sin que conste la interposición de recurso por estos hechos.

2.- Denuncia nº XXX, por diversas infracciones en materia de animales de compañía, y que dio lugar a la incoación de un expediente sancionador en materia de



animales de compañía (**Expte.: AC/49/51/22**) por la comisión de las siguientes infracciones graves:

- Ausencia de vacunación y desparasitación de un perro.
- Ausencia de identificación con microchip fuera del plazo establecido de 3 meses desde su nacimiento.

Dicho expediente concluyó con la imposición de una nueva sanción por Resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de fecha XXX, sin que conste tampoco la interposición de recurso por estos hechos.

Asimismo, la citada Consejería también reconoció que, como consecuencia de la denuncia formulada por el Sr. XXX y varios vecinos más de la localidad de XXX, se habían iniciado las investigaciones para proceder a una inspección conjunta de la explotación ganadera por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales y la Guardia Civil, la cual se llevó a cabo el 3 de octubre de 2022, en el que se constataron los siguientes hechos:

- Según el libro de registro del código de explotación agraria, tenía un censo de 244 cabezas de ganado ovino reproductoras.
- Se comprobó la existencia de dos cadáveres de ovejas en la parcela 121, polígono 21, de esa localidad.
- En la parcela 193, polígono 23, se encontraban aproximadamente 70 ovejas adultas en aparente buen estado sanitario y de limpieza, hallándose el resto del rebaño sin vigilancia en el monte.
- Por último, se resaltaba que en la ubicación principal de la explotación (polígono 23 parcelas 28 y 30) no se encontraba ninguna cabeza de ganado ovino, y que tampoco disponía de ninguna construcción para albergar estos animales.

Tras realizar esta primera inspección, se continuaron las labores de comprobación, acreditándose que, en noviembre de 2022, se había procedido a la retirada de los cadáveres de 6 cabezas de ganado ovino, entre las que se encontraban las dos halladas en la inspección realizada el mes anterior, remitiendo igualmente el contrato suscrito por el titular de la explotación con una entidad aseguradora para la retirada y destrucción de los cadáveres de los animales.

Más tarde, el 9 de diciembre de ese año, miembros de la Unidad Veterinaria de XXX realizaron una nueva inspección, levantándose el acta de inspección ZA nº XXX, en la que se hizo constar lo siguiente:



- Tras realizar varias ventas, el censo actual era de 75 ovinos adultos, 6 corderas y 4 corderos menores de 4 meses.

- Se observaron deficiencias con relación a las 14 bajas por muerte de animales comunicadas por el titular en el documento de fecha 7 de diciembre, ya que nueve de estos animales se encontraban presentes en la explotación.

- Los animales se encontraban en buen estado sanitario y de bienestar animal.

- En el informe complementario al acta de inspección se hizo constar como conclusión que *“el titular no tenía un control efectivo del rebaño (el subrayado es nuestro), ya que había dado de baja 9 ovinos al azar, sin revisar los 75 ovinos de censo; almacenaba poco alimento para el invierno cuando es preciso complementar la ración de los animales por las heladas del pasto”*.

Sin embargo, a fecha de recepción del último informe remitido por esa Consejería, nos comunica que, hasta la declaración de firmeza del expediente sancionador nº XXX, no es posible iniciar un nuevo expediente sancionador como consecuencia de la aplicación del principio de “non bis in ídem”.

Por último, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio nos comunicó en su informe remitido que el Sr. XXX había solicitado al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora un aprovechamiento de pastos sobrantes en el monte de utilidad pública, habiendo ingresado el 30 de septiembre de 2022 el 15% del importe para el fondo de mejoras. Sin embargo, no se había podido expedir la licencia pertinente al no haber ingresado en la cuenta del Ayuntamiento de XXX el 85% restante que le corresponde como titular del monte, lo cual había sido comunicado a los efectos oportunos a la guardería forestal.

En su último informe remitido, dicho órgano autonómico nos informó que los agentes medioambientales habían constatado en inspecciones practicadas en los meses de julio, agosto y septiembre de 2022 la presencia de ganado ovino en el interior del monte sin disponer de la licencia preceptiva, lo cual habría supuesto la tramitación por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora del pertinente expediente sancionador por la comisión de una infracción en materia de montes. Igualmente, el citado ganadero denunciado no figura en la relación emitida por el Ayuntamiento de XXX para el plan de aprovechamientos ganaderos correspondiente a 2023.

Por último, el autor de la queja nos comunica que, en la actualidad, persisten los problemas generados por el ganado ovino, propiedad del Sr. XXX, ya que siguen pastando sus ovejas tanto en el monte, como en fincas particulares sin permiso de sus propietarios. Asimismo, en ocasiones, han podido observar que continúa abandonando animales muertos en el campo, sin que los técnicos de la Unidad Veterinaria de XXX



adopten medidas eficaces que evite la propagación de enfermedades infecto-contagiosas al resto de la cabaña ganadera de la zona.

A la vista de lo informado, procedemos a poner de manifiesto **la argumentación jurídica** en la que se basa la presente Resolución.

Como cuestión previa, debemos indicar que esta Procuraduría va a estudiar únicamente la actuación de la Administración autonómica en relación con el cumplimiento de la normativa vigente, sin entrar en ningún momento en cuestiones de derecho civil o de disputas vecinales de carácter personal, las cuales, de existir, deberán ser sustanciadas ante los órganos jurisdiccionales competentes.

Para analizar la presente queja, debemos partir de que, en las labores de investigación practicadas tanto por los agentes medioambientales y de la Guardia Civil, como de los veterinarios del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora, se ha acreditado la veracidad de los hechos puestos de manifiesto en los escritos presentados por el Sr. XXX y varios vecinos de la localidad de XXX, al haberse acreditado las infracciones cometidas por el Sr. XXX, como titular de la explotación de ganado ovino objeto de la presente queja. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, con carácter general, los hechos constatados por los agentes de la autoridad denunciantes gozan de la presunción de veracidad conforme a los términos previstos en el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: *“Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos, harán prueba de éstos (el subrayado es nuestro) salvo que se acredite lo contrario”*. Por lo tanto, se hace necesario analizar por separado las actuaciones que, a nuestro juicio, deberían adoptar cada una de las dos Consejerías en el ámbito de sus competencias.

Desde la perspectiva agraria, tenemos que tener en cuenta que la interposición de una denuncia por parte de la Patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil de Zamora motivó que se haya tramitado por el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora un expediente sancionador (**Expte.: XXX**), al haberse constatado la vulneración de las siguientes obligaciones recogidas en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal:

- El artículo 38.1 de esa norma exige que *“todas las explotaciones de animales deben estar registradas en la comunidad autónoma en que radiquen, y los datos básicos de estos registros serán incluidos en un registro nacional de carácter informativo”*. Esta omisión supuso la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 84.2 de la citada Ley: *“El inicio de la actividad en una explotación de animales de nueva instalación, o la ampliación de una explotación ya existente, sin contar con la previa autorización administrativa o sin la inscripción en el registro correspondiente”*.



- El artículo 38.2 de esa norma obliga también a que cada explotación ganadera mantenga actualizado un libro de explotación en el que se registrarán, al menos, los datos que la normativa aplicable disponga, del que será responsable el titular de la explotación. El incumplimiento de este precepto se considera, en principio, como una infracción leve conforme a lo previsto en el artículo 83.4 de la Ley 8/2003.

- Sobre el abandono de los cadáveres, hay que recordar que el artículo 7.1 f) de la Ley de Sanidad Animal establece como una de las obligaciones para los propietarios o poseedores, sean personas físicas o jurídicas, la de *“proceder a la eliminación o destrucción de los cadáveres de animales (...), que tengan bajo su responsabilidad, en la forma y condiciones establecidas en la normativa aplicable en cada caso”*. Esta exigencia se reitera en su artículo 37 al prever que *“cualquier actividad de explotación animal estará supeditada a la eliminación higiénica de efluentes, subproductos de explotación, residuos de especial tratamiento y cadáveres, de acuerdo con las normas de sanidad animal, salud pública y protección del medio ambiente”*. El incumplimiento de estas obligaciones supondría, en principio, la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 84.20 de esa norma: *“El abandono de animales, de sus cadáveres o de productos o materias primas que entrañen un riesgo sanitario para la sanidad animal, para la salud pública o contaminen el medio ambiente, o su envío a destinos que no estén autorizados, siempre que no esté tipificado como falta muy grave”*.

Sin embargo, tal como se pudo comprobar en las inspecciones que llevaron a cabo, en los meses de octubre y de noviembre de 2022, los técnicos de la Unidad Veterinaria de XXX tras la recepción de la denuncia remitida por el Sr. XXX, se mantuvieron los problemas sanitarios causados por la falta de cuidado y de control del ganado ovino propiedad del Sr. XXX, puesto que se han abandonado más cadáveres en el campo y existía un desfase en los animales dados de baja y alta en la explotación. Sin embargo, no se consideró conveniente tramitar otro expediente sancionador al no haber adquirido firmeza la sanción impuesta en el expediente anteriormente mencionado.

No obstante lo cual, esta Procuraduría considera que es necesario dirimir las actuaciones que deberían adoptar los órganos competentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para evitar que esta situación genere un riesgo sanitario para el resto de explotaciones ganaderas existentes en la zona, ya que, según nos ha comunicado el reclamante, se siguen abandonando en el campo cadáveres de ovejas. Para ello, en primer lugar, debemos destacar que, en las inspecciones practicadas, se ha constatado la falta de control de estos animales, al entran a pastar en terrenos no autorizados por sus propietarios o en el monte de utilidad pública, lo cual supone un incumplimiento de la exigencia fijada en el artículo 7.1 g) de la Ley 8/2003, a los titulares de las explotaciones ganaderas de *“no abandonar a los animales que tengan bajo su responsabilidad, o sus cadáveres”*.



Por lo tanto, al haber adquirido ya la firmeza del expediente sancionador tramitado en su día, esta Institución considera que, en el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 75.1 de la Ley de Sanidad Animal, debería llevarse a cabo una inspección por parte de los veterinarios competentes en la explotación ganadera del Sr. XXX para comprobar si el manejo del ganado ovino es el adecuado, si se cumplen las exigencias formales en las altas y bajas de los animales, y si la gestión de los cadáveres es correcta conforme a las exigencias establecidas en el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.

En el supuesto de que entendiésemos que se incumplen estas previsiones, esta Procuraduría considera que, además de tramitar el expediente sancionador que corresponda, el órgano competente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural podría, incluso, acordar aquellas medidas accesorias que, para evitar los riesgos sanitarios que la comisión de estas infracciones supone para el resto de los ganaderos, prevé el artículo 90.1 de la Ley 8/2003: *“El órgano al que corresponda resolver el expediente sancionador podrá acordar, como sanciones accesorias, las siguientes:*

a) Medidas de corrección, seguridad o control, que impidan la continuidad en la producción del daño.

b) Decomiso de los animales, productos o materiales que puedan entrañar riesgo grave para la sanidad animal o cualquier tipo de riesgo para la salud humana.

c) Destrucción de animales o productos de origen animal, si su utilización o consumo constituyeran peligro para la salud pública o la sanidad animal, o cuando así lo disponga la normativa comunitaria”.

Desde la perspectiva medioambiental, la presencia del ganado ovino en el Monte de Utilidad Pública nº XXX denominado “XXX” supone un aprovechamiento forestal en los términos recogidos en el artículo 42.1 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León: *“A los efectos de la presente Ley, se entiende por aprovechamientos forestales la utilización de los productos y recursos naturales renovables que se generan en el monte como consecuencia de los procesos ecológicos que en él se desarrollan”.* En el punto segundo de ese precepto, se citan los que *“tienen la condición de aprovechamientos forestales los maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, los de pastos (el subrayado es nuestro), la resina, la actividad cinegética, los frutos, los hongos, el corcho, las plantas aromáticas, medicinales y melíferas y los demás productos y servicios con valor de mercado característicos de los montes”.*



En consecuencia, el aprovechamiento pascícola en este monte debe regirse por las disposiciones recogidas en la Sección Segunda del Capítulo I, del Título IV de la Ley de Montes de Castilla y León, tal como se prevé en el artículo 45.1 de esa norma: *“Se rigen por la presente Sección los aprovechamientos forestales que se realicen en los montes catalogados de utilidad pública”*. Esto supone que, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 3/2009, de 6 de abril: *“Los aprovechamientos en los montes catalogados de utilidad pública se ajustarán a las condiciones técnico-facultativas y a las correspondientes condiciones económico-administrativas, en los términos que se determinan a continuación”*.

De esta forma, los pliegos de condiciones técnico-facultativas son aprobados por los órganos competentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, los cuales *“determinarán cuantas cuestiones incidan o repercutan en la persistencia y mejora de las condiciones del monte o en la compatibilidad en la ejecución de los diferentes aprovechamientos y usos, o en las condiciones ecológicas y de conservación por cuya salvaguardia debe velar la consejería competente en materia de montes. Entre otras determinaciones, los pliegos contendrán las garantías técnicas, los plazos de ejecución de los aprovechamientos, los supuestos de otorgamiento de la prórroga de ejecución de los aprovechamientos y las condiciones de su suspensión (artículo 46.3 de la Ley de Montes de Castilla y León)”*. En todos estos casos, *“la entidad pública titular del monte no podrá enajenar los productos por debajo del precio mínimo de enajenación, ni incorporar condiciones económico-administrativas que sean contrarias a las cláusulas del pliego de condiciones técnico-facultativas. Dichas estipulaciones serán nulas de pleno derecho (artículo 46.6 de dicha norma)”*.

En cambio, según se prevé en el artículo 46.5 de la norma autonómica, corresponde a los órganos competentes de la Administración propietaria de los montes catalogados de utilidad pública determinar *“las condiciones económico-administrativas se contendrán en los correspondientes pliegos formulados por la entidad pública titular del monte, de conformidad con la legislación sobre patrimonio y contratación que les sean aplicables en cada caso”*. No obstante, se vuelve a resaltar en dicho precepto que *“el precio mínimo de enajenación de los productos forestales será determinado por la consejería competente en materia de montes”*.

Adicionalmente, el artículo 53 de la Ley 3/2009 regula de manera específica el aprovechamiento de pastos, priorizando en su apartado primero su disfrute vecinal: *“En los montes catalogados de utilidad pública, los aprovechamientos consuetudinariamente destinados al uso propio de los vecinos tendrán carácter preferente (el subrayado es nuestro) y se adjudicarán al precio mínimo de tasación que determinen la consejería competente en materia de montes y la entidad propietaria, en cada caso, conforme al artículo 46.5 de esta ley”*. En estos casos, el punto tercero de ese precepto obliga a la entidad propietaria del monte a *“comunicar anualmente a la consejería competente en*



materia de montes la relación de vecinos que pretendan disfrutar de los aprovechamientos para uso propio y la parte que de los mismos le corresponde a cada uno”. Finalmente, el artículo 53.2 prevé que “en el supuesto de los aprovechamientos de pastos, la parte no destinada a uso propio de los vecinos será considerada como pastos sobrantes y en su adjudicación tendrán preferencia los titulares de explotaciones ganaderas vecinos de la entidad propietaria, sin perjuicio de otros criterios que pudieran establecerse mediante orden de la consejería competente en materia de montes. Queda prohibida la cesión o subarriendo a terceros de estos aprovechamientos”.

En relación con la cuestión objeto de la presente queja, es preciso resaltar que, de la documentación remitida por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, podría deducirse que en el año 2022 nos encontrábamos ante un supuesto de aprovechamiento de pastos sobrantes, mientras que, en cambio, al siguiente año se optó por un aprovechamiento vecinal. Sin embargo, en ambos casos, se requiere la obtención de una licencia de aprovechamiento, la cual *“habilita para la ejecución de los correspondientes aprovechamientos con sujeción a las condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnico-facultativas. Para su obtención será necesaria la previa acreditación por el titular del aprovechamiento del ingreso del porcentaje correspondiente a la obligación del fondo de mejoras, además de, en su caso, el ingreso de los demás gastos derivados de las operaciones facultativas necesarias para la determinación y control del aprovechamiento, la constitución de las garantías correspondientes y la justificación del cumplimiento de las obligaciones económicas con la Entidad propietaria del monte (el subrayado es nuestro). Igualmente deberá presentar la documentación que en su caso determine la consejería competente en materia de montes por razón del tipo de actividad. El cumplimiento de estas obligaciones, cuando el aprovechamiento haya sido adjudicado a través de un procedimiento de enajenación, deberá producirse en el plazo de un mes desde la adjudicación definitiva. En el caso de adjudicaciones directas o de otro tipo, también se cumplirán los requisitos y obligaciones en el plazo de un mes desde la misma (artículo 51.2 de la Ley 3/2009)”.*

Sin embargo, en el año 2022, el Sr. XXX no pudo obtener dicha licencia, al incumplirse estos requisitos, ya que únicamente abonó la parte correspondiente al Fondo de Mejoras del Monte (15%), sin que conste que pagase el resto que correspondía al Ayuntamiento de XXX como titular del monte. Esta circunstancia conllevó que, al haberse acreditado en la inspección practicada por los agentes medioambientales que sus ovejas pastaban en ese monte, se tramitase un expediente sancionador por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora al suponer estos hechos una infracción tipificada en el artículo 113 d) de la Ley de Montes de Castilla y León: *“Sin perjuicio de las establecidas en el artículo 67 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, son infracciones a lo dispuesto en esta Ley las siguientes: (...)*

d) La realización de aprovechamientos forestales sin licencia de aprovechamiento”.



De acuerdo con la documentación remitida, la comisión de esta irregularidad ha podido continuar, ya que, en el listado remitido en el año 2023 por el Ayuntamiento de XXX, no constaba el Sr. XXX entre los ganaderos beneficiarios del aprovechamiento pascícola vecinal de ese monte. En este caso, el mantenimiento de esta situación supondría un perjuicio para el resto de los beneficiarios que dispongan de esa licencia de aprovechamiento al haberse producido una merma de los pastos a los que tienen derecho.

Por lo tanto, en el supuesto de que el ganado ovino de D. XXX continuase pastando en el Monte de Utilidad Pública nº XXX sin haber obtenido la preceptiva licencia de aprovechamiento, se debería tramitar por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora un nuevo expediente sancionador ya que se incurriría de nuevo la infracción tipificada en el artículo 117 d) de la Ley 3/2009. Además, sería necesario que el órgano competente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio iniciase los trámites para ordenar la inmediata salida del ganado de dicho lugar, conforme a los términos recogidos en el artículo 122.2 de la citada norma: *“En las infracciones por pastoreo, y sin perjuicio de disponer la inmediata salida del ganado (el subrayado es nuestro), se atenderá a que no quede abandonado, acompañando el ganado hasta el redil más próximo o empleando cualquier otro medio que las circunstancias aconsejaren”*.

En virtud de todo lo expuesto, y al amparo de las facultades conferidas por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y por la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común, consideramos oportuno formular la siguiente **Resolución**:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL:

PRIMERO: Que, dados los antecedentes recogidos en el expediente sancionador SA/49/08/22 y en las posteriores inspecciones practicadas en los meses de octubre y de noviembre de 2022 por los técnicos de la Unidad Veterinaria de XXX, se acuerde, en el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 75.1 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, por el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora llevar a cabo una nueva inspección en la explotación de ganado ovino de D. XXX, de la localidad de XXX, con el fin de comprobar si se cumplen las obligaciones fijadas a los propietarios y poseedores de esos animales en los artículos 7.1 f) y g), 37 y 38.1 y 2 de la citada norma, y si la gestión de sus cadáveres es conforme a lo exigido en el Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales), y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.



SEGUNDO: Que, en el supuesto de que en dicha gestión se acreditase que se sigue incumpliendo estas previsiones, se acuerde por el órgano competente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural tramitar el expediente sancionador que corresponda, pudiendo incluso acordar las medidas accesorias previstas en el artículo 90.1 de la Ley 8/2003 para evitar los riesgos sanitarios que la comisión de estas infracciones supone para el resto de los ganaderos de la zona.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO:

PRIMERO: Que, en el caso de que el ganado ovino de D. XXX continuase pastando en el Monte de Utilidad Pública nº XXX, denominado “XXX” sin haber obtenido la licencia de aprovechamiento requerida conforme a lo previsto en el artículo 51.2 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, se tramite por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora un nuevo expediente sancionador por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 117 d) de dicha norma.

SEGUNDO: Que, adicionalmente y con el fin de impedir los perjuicios que puedan sufrir el resto de los ganaderos beneficiarios del aprovechamiento pascícola en dicho monte de utilidad pública, se inicien los trámites por el órgano competente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para ordenar la salida del ganado ovino propiedad del Sr. XXX de dicho espacio, tal como se prevé en el artículo 122.2 de la Ley 3/2009.

Esta es nuestra resolución y así se la hacemos saber, con el ruego de que nos comunique de forma motivada la aceptación o no aceptación de la misma por parte de los órganos que correspondan de las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio **en el plazo de dos meses**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley Reguladora de la Institución. En el caso de que se acepte, se ruego dé traslado a esta Procuraduría, para nuestro conocimiento de copia de los actos administrativos que lleve a cabo para cumplir esta Resolución.

Una vez realizadas las comunicaciones oportunas, se acuerda publicar la presente Resolución en la página web de esta Institución, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.

Pendiente de sus noticias, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

EL PROCURADOR DEL COMÚN
Tomás Quintana López